

Marcela Terrazas Basante

*En busca de una nueva frontera  
Baja California en los proyectos expansionistas  
norteamericanos, 1846-1853*

México

Universidad Nacional Autónoma de México  
Instituto de Investigaciones Históricas

1995

162 + [4] p.

Mapas

(Serie Historia Moderna y Contemporánea, 25)

ISBN 968-36-4597-6

Formato: PDF

Publicado en línea: 16 de marzo de 2017

Disponible en:

[http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/en\\_busca/nueva\\_frontera.html](http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/en_busca/nueva_frontera.html)

DR © 2017, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas. Se autoriza la reproducción sin fines lucrativos, siempre y cuando no se mutile o altere; se debe citar la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, se requiere permiso previo por escrito de la institución. Dirección: Circuito Mtro. Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510. Ciudad de México



INSTITUTO  
DE INVESTIGACIONES  
HISTÓRICAS



## CONCLUSIONES

La marcha norteamericana hacia el oeste emprendida durante el siglo XIX tuvo entre sus principales objetivos la incorporación de las provincias septentrionales mexicanas. Después de repetidos y vanos intentos por hacerse de ellas mediante acuerdos diplomáticos, los estadounidenses determinaron obtenerlas a través de la guerra.

Las pretensiones de los Estados Unidos sobre México, encaminadas desde un principio a la anexión de la Alta California y Nuevo México, crecieron como consecuencia del éxito de sus fuerzas en la contienda. Desde el comienzo, empero, prevaleció la decisión de no adquirir territorios mexicanos densamente poblados e imperó la preocupación de que las tierras obtenidas de los vencidos no se convirtieran en un factor de división entre los estados de la Unión Americana.

La conquista de las Californias estuvo determinada, en buena medida, por esta consideración. Por ello, se entiende que los norteamericanos se lanzaran en primer término sobre la Nueva California, esperando que su dominio trajera consigo la hegemonía sobre la península. Esta impresión debió reforzarse con la docilidad observada por las autoridades civiles de las Californias. La ocupación de la Vieja California no se decidió hasta el momento en que los estadounidenses supieron de las amenazas de los mexicanos de reconquistar Alta California apoyados en aquellas tierras.

Iniciada tardíamente, en marzo de 1847, la invasión a Baja California dividió a los vecinos de ese territorio. Por una parte, las altas autoridades civiles y algunos eclesiásticos peninsulares acordaron la neutralidad con el invasor y, junto con ricos propietarios y comerciantes, se sumaron al sector colaboracionista; por la otra, surgió la resistencia organizada por los ayuntamientos de pueblos sometidos, en donde vecinos de escasos recursos formaron milicias locales para oponerse a los invasores, y sustituyeron a las viejas autoridades por nuevos gobiernos locales. En este sentido, la ocupación movió los resortes de participación democrática peninsular que operaron a lo largo de la invasión y que, al accionarse con insistencia, motivaron la búsqueda de ayuda y protección militar de una entidad vecina, Sonora, así como el apoyo del gobierno federal.

La presencia norteamericana en la península, que se prolongó hasta el último momento en que ello fue posible y presentó a los estadounidenses mayores dificultades de las previstas, hizo patente el afán expansivo sobre la región y los recursos con que contaron los norteamericanos; mostró también

el soporte prestado por la federación americana a la conquista, y el gran interés de algunos empresarios particulares por la zona.

Contrasta con lo anterior la situación de los defensores sudcalifornios: el auxilio demandado con insistencia al gobierno federal, fue exiguo y tardío, y era prueba de la penosa escasez de recursos de los estados, del desinterés de muchas entidades y de su singular sentido de federalismo, según el cual cada estado velaba por su propia seguridad; exhibió, asimismo, la desorganización de las fuerzas nacionales y la incapacidad del gobierno federal para articular un respuesta concertada frente al enemigo y para atender las necesidades más urgentes de las regiones particularmente vulnerables. Entidades alejadas del centro y débiles como Baja California quedaban desprotegidas y abandonadas a su suerte.

Desde un principio, la división interna mexicana, agudizada por el conflicto, causó la ampliación de las exigencias norteamericanas que, acompañadas por el ánimo triunfalista y el nacionalismo exacerbado de muchos estadounidenses, sumaron nuevos territorios a los planes anexionistas iniciales; con ello, la frontera descendería, hasta el río Usumacinta, de acuerdo con los planes de algunos, o hasta el paralelo 28°, según los proyectos de otros.

La disensión interior en México, manifiesta a lo largo de la guerra, fue también patente en el curso de las negociaciones para poner fin al conflicto. No era de extrañar que la administración mexicana negociadora del tratado de paz tuviera que enfrentar las presiones de la oposición intestina, particularmente la de los federalistas radicales, y la reacción popular que rechazó la cesión territorial. Por ello, los comisionados actuaron en un principio en forma errática e incierta, lo que los llevó a firmar la paz en condiciones más desventajosas. Finalmente, el convenio negó la concesión sobre Tehuantepec y mantuvo a Baja California y al territorio que la comunica con la república bajo la jurisdicción mexicana.

El trazo de la nueva frontera sorprendió y disgustó a algunos mexicanos y a muchos estadounidenses por dejar la península en manos de México. Se acusó al comisionado J. P. Trist de haber entregado un territorio que las fuerzas armadas de los Estados Unidos habían conquistado virtualmente. Quienes actuaron de esta manera dejaron de considerar que la delimitación de los nuevos linderos no estuvo determinada, exclusivamente, por las acciones militares y que las condiciones de la política interna, tanto de los Estados Unidos como de México, tuvieron un peso decisivo en el curso de las negociaciones y en los términos del tratado de paz. Olvidaron que, desde las primeras instrucciones del Departamento de Estado norteamericano a su comisionado, se estableció la incorporación de Nuevo México y Alta California a la Unión Americana, como condiciones *sine qua non* para el acuerdo de paz; esa anexión fue, en última instancia, el *casus belli*. No era

éste el caso de la Baja California o la concesión del derecho de tránsito por el Istmo de Tehuantepec que, aunque importantes, eran puntos susceptibles de negociación. Esto nos habla del orden imperante en el marco de prioridades estadounidenses de ese momento.

A pesar de la existencia de sectores profundamente interesados en la incorporación de territorios mexicanos mucho más extensos, como los grupos *Young America* o *All America*, importantes segmentos de la sociedad norteamericana temieron que la anexión de todo México precipitara la crisis de la expansión de la esclavitud, como a la larga sucedió. Por otra parte, los nuevos representantes antiexpansionistas, electos antes de las victorias militares de 1847, comenzaron a influir en el seno del congreso norteamericano, donde las pugnas entre miembros de los partidos Whig y Demócrata provocaron acalorados debates en torno a la anexión de territorios y a la propia guerra. De cualquier manera, las gestiones diplomáticas del comisionado estadounidense —testigo perceptivo de la crítica situación mexicana y temeroso de que la anexión total de México ocasionara el colapso de la federación americana— fueron lo suficientemente aceleradas para no dar tiempo a que los anexionistas tomaran la delantera. En todo, caso la actuación de Trist era, más que una acción individual o caprichosa, un reflejo y una respuesta a los desacuerdos entre los grupos de poder norteamericano. Así las cosas, los expansionistas más radicales no pudieron ejercer su influencia sobre la demarcación de la frontera que se estableció en el Tratado de Guadalupe Hidalgo; las contradicciones entre el Norte y el Sur estadounidense, agudizadas a medida que avanzó el siglo XIX, determinaron posiciones antagónicas respecto a la anexión de otros territorios que no fueran los inicialmente pensados: el límite meridional de Texas en la ribera del Bravo, Nuevo México y Alta California. Visto así, el tratado de paz de febrero de 1848 no fue sólo el resultado de las negociaciones entre los comisionados mexicanos y norteamericanos; detrás de ellas estaba un difícil acuerdo entre whigs y demócratas, entre esclavistas y antiesclavistas. La dirección de la política interna de los Estados Unidos definió gran parte del curso de su política exterior, de las relaciones con México y de los nuevos linderos con la nación del sur. El expansionismo de los Estados Unidos, proyectado por el consenso de la federación norteamericana, se vio paradójicamente limitado por la necesidad de mantener el pacto federal.

Conviene destacar que los intereses estratégicos comerciales y navales que movían la codicia norteamericana por las Californias pudieron satisfacerse, en gran medida, con la adquisición de la Nueva California, poseedora de magníficos puertos en San Francisco y San Diego, desde donde era posible establecer la plataforma para el comercio con Asia e Hispanoamérica y los enclaves marítimos indispensables para la flota que llevaría a cabo dicho comercio. La península, de tierras pedregosas e infértiles, carente de puertos

que compitieran ventajosamente con los de Alta California, fue menos apetecible para los norteamericanos.

Desde su propio ángulo, los mexicanos que negociaron el fin de las hostilidades se opusieron a la pérdida de Baja California, no tanto por el valor que asignaron a la península en sí misma, sino por el peligro que representaba la presencia norteamericana frente a las costas del noroeste de México. La administración, integrada por liberales moderados, se vio presionada por la oposición de liberales radicales que los acusaron de entregar el país al enemigo. De cualquier manera, en el momento de efectuarse los acuerdos de paz, el gobierno central pareció no considerar los esfuerzos de resistencia librados por importantes sectores de la población sudcaliforniana. Por su parte, la administración norteamericana desatendió a una amplia capa de sectores expansionistas que deseaba la incorporación de Baja California y otras provincias mexicanas a la Unión Americana en aras de la preservación de la federación. El tratado de paz entre las dos naciones y el establecimiento de la frontera entre ambas fue una decisión de élites políticas, condicionada en buena medida por las propias contradicciones políticas internas.

La decisión final sobre el trayecto de la línea fronteriza se relaciona con la vieja atracción norteamericana por California, expresada desde los albores del México independiente. Tiene que ver también con la apertura de los puertos chinos al comercio estadounidense en la cuarta década del siglo XIX que revaloró la importancia del puerto de San Francisco. Entonces, como había sucedido con anterioridad, volvió a explotarse el temor por la presencia británica en California. El deseo de anexar la Nueva California unió a demócratas y a whigs, que sólo difirieron en los métodos propuestos para hacerse de ella. En realidad, el recelo estadounidense acerca de las ambiciones de Inglaterra o Francia sobre la región provenía, en gran parte, de los propios apetitos norteamericanos por California, ya que las potencias europeas tenían que hacer frente a problemas que les dificultaban la realización de planes en aquella provincia.

La atracción norteamericana por el oeste, con profundas raíces histórico-religiosas volcadas en la tesis misional del Destino Manifiesto, encontró en este principio espiritual, político y económico la justificación de sus apetitos hegemónicos y de su vocación imperial. La herencia puritana calvinista de los norteamericanos legitimó sobradamente el expansionismo territorial de los Estados Unidos, reafirmando su convicción expansiva. La doctrina del Destino Manifiesto, en su vertiente de extensión de la fórmula perfecta de gobierno fue, asimismo, un principio justificativo del expansionismo. De esta manera, las razones filosóficas y religiosas que estaban en la base del puritanismo hacían de los Estados Unidos el árbitro del gobierno, de la administración de las tierras que les estaban predestinadas por Dios y la

naturaleza, lo que hubo que aplicar con elasticidad considerable en el momento de fijar la frontera con México.

A todo esto se aunaba el principio de la proximidad geográfica. Así, los Estados Unidos derivaron, sin muchos obstáculos morales, la concreción del concepto de *hemisferio de interés* que, sobra decirlo, asumió a América como ámbito reservado a los norteamericanos y, por ende, lugar vedado a los europeos que ponían en entredicho su seguridad. La Doctrina Monroe no hizo sino recoger esta corriente de pensamiento que, como bien se observa, poseía viejas y profundas raíces protestantes. La famosa doctrina, cuyos orígenes mucho tenían que ver con una fobia, con un temor por la propia seguridad, contenía en su seno el germen expansivo, pues, para salvaguardar la seguridad interna, había que adueñarse de los territorios vecinos, de las tierras adyacentes a éstos y de las regiones inmediatas a ellos... y así sucesivamente. Desde esta perspectiva, los movimientos expansivos como *All America* se entienden sin mayor dificultad.

En el marco de este pensamiento, la seguridad norteamericana estaba amenazada por la presencia rusa en Alta California, por la británica en Oregon y por las supuestas ambiciones inglesas en la misma California. Hasta este punto, las alusiones norteamericanas más explícitas hablaban de California, sin precisar si se trataba sólo de la Alta California o de ambas Californias. No existe duda alguna respecto de la atracción estadounidense por Nueva California; lo que resulta menos claro es hasta qué punto anhelaban la Vieja California, o si la consideraban un apéndice del territorio expresamente ambicionado.

A fin de cuentas, Alta California constituyó un objetivo prioritario dentro de los intereses norteamericanos durante la primera mitad del siglo XIX; fue, asimismo, un punto de fricción entre ingleses y norteamericanos deseosos de afirmar sus posiciones hegemónicas continentales. La anexión de Alta California a los Estados Unidos representó, desde esta perspectiva, una victoria, no sólo de la Doctrina del Destino Manifiesto, sino también de la Doctrina Monroe, en su acepción de supremacía y exclusividad norteamericana en el hemisferio.

Desde la óptica de la política interna norteamericana, el expansionismo hacia el Oeste y la incorporación de territorio mexicano respondieron, por una parte, a la necesidad de anexarse nuevas tierras para mantener el equilibrio regional Norte-Sur, cuya expresión política se dejaba sentir con claridad en la pugna por el dominio del congreso. Por otra parte, se consideró que la lucha por extender los linderos uniría a los norteamericanos de los estados libres con los esclavistas al darles un propósito común que acabaría por diluir las crecientes tensiones entre ambos. A esta seductora solución de los problemas interregionales se sumó el atractivo de las tierras vírgenes del oeste, que

los plantadores vislumbraban como fértiles campos algodonereros cuyo producto, vendido en el mercado inglés, llenaría los bolsillos de la élite sureña.

La anexión de territorios era, sin embargo, un arma de doble filo, pues parecía aportar, por un lado, el deseado elemento de armonía que tanto necesitaba la frágil Unión Americana; pero, por el otro, amenazaba con convertirse en la manzana de la discordia que haría estallar el conflicto entre el Norte y el Sur, pues los yanquis veían con recelo la anexión ilimitada de tierras cuya proximidad con los estados esclavistas las haría caer bajo sus dominios, con el consecuente fortalecimiento político de los plantadores. El remedio que se precisaba para el mal de la dispersión debía administrarse en la dosis estrictamente adecuada, si no se quería llegar a un estado crítico.

A este respecto cabe señalar que la anexión de Alta California era una solución anhelada por todos; Norte y Sur coincidieron en los propósitos expansivos sobre esa región. En cambio, la posible anexión de Baja California tuvo la virtud de provocar los síntomas de la fragmentación. La incorporación de la península a la Unión Americana parecía convertir la dosis curativa en dosis mortal. Así pareció entenderlo el comisionado Trist al establecer los términos de la paz con México.

Los afanes expansionistas norteamericanos de la primera mitad del siglo XIX aglutinaron a amplias capas de la sociedad de Norteamérica: plantadores, granjeros, industriales, empresarios ferrocarrileros, especuladores, buscadores de fortuna, etcétera. Por ello no extraña encontrar que los partidos políticos Whig y Demócrata abanderaran el movimiento. Pero había diferencias de modalidades, ritmos y límites de extensión entre ambos. En tanto los whigs preferían la negociación diplomática para hacerse de territorios, los demócratas estaban prontos para ir a la guerra; mientras los primeros se mostraron pacientes en sus apetitos expansivos, los segundos fueron ansiosos e impacientes. Aquéllos eran hasta cierto punto morigerados en sus afanes de extender el territorio; éstos eran más voraces y entre ellos los había que deseaban apropiarse de todo el hemisferio. Estas diferencias obraron desde luego en los grandes momentos del expansionismo estadounidense y, como se ha visto, en el caso de la expansión sobre las Californias. El propio congreso norteamericano, en plena guerra con México, presenció la tormenta de acaloradas discusiones entre demócratas expansionistas a ultranza y whigs expansionistas moderados; gran parte de esa disputa se volcó en el trazo de la línea frontera.

También en México, la guerra con los Estados Unidos puso de manifiesto la escisión irreconciliable entre los grupos políticos más activos. De igual manera, la firma del tratado de paz sacó a la luz el divisionismo imperante entre los partidos, si así se les podía nombrar. Los liberales moderados, que se hallaban en el poder al momento de firmar la paz, defendieron su decisión como la única forma de salvar a México de la anexión total a los



Estados Unidos; los liberales radicales, contrarios al fin de la guerra, acusaron al gobierno de Manuel de la Peña y Peña de extralimitarse en sus funciones y de entregar el territorio nacional al enemigo.

Los regímenes mexicanos de la posguerra sufrieron el embate de partidos y facciones políticas, a lo que se aunaban problemas aún mayores como un erario vacío, las exigencias de los acreedores internos y externos, la inquietud social que amenazaba desembocar en una guerra civil, las incursiones nómadas en el septentrión mexicano, los apetitos expansionistas insatisfechos con la frontera trazada en Guadalupe Hidalgo, los proyectos secesionistas ideados en el norte de México y apoyados de diversas maneras por estadounidenses. En suma, la amenaza de la desintegración nacional.

El panorama general estaba marcado por la inseguridad y la zozobra, por la desconfianza en la solidez de la unidad federal y por la limitada autoridad del gobierno en muchos ámbitos del territorio nacional. El cuadro nos mostraba los graves problemas que dificultaban e impedían la constitución de un verdadero Estado nacional, capaz de salvaguardar la soberanía e integridad territorial ante los amagos externos e internos, hábil para mantener el pacto federal y provisto de solvencia para administrar, en forma saludable, los recursos de la nación.

La ausencia de un verdadero Estado nacional era patente a los habitantes de los territorios fronterizos del norte de México, quienes, sensiblemente vulnerables a los apetitos territoriales norteamericanos, sentían un gran temor de ser absorbidos por los Estados Unidos. Sus recelos eran alimentados por las frecuentes incursiones de grupos de norteamericanos que se adentraban en aquellas comarcas, y por las expediciones filibusteras organizadas, allende la frontera, con la tácita aprobación de las autoridades estadounidenses. Los esfuerzos del gobierno federal por reorganizar la administración de las entidades del norte de México —particularmente de Baja California—, los propósitos gubernamentales de poblar aquel estado y los ensayos para estrechar su relación con el centro de México fueron infructuosos.

No obstante sus intenciones de reestablecer la paz social y el orden en el país, los regímenes mexicanos posbélicos hubieron de hacer frente a las continuas presiones que el gobierno norteamericano hizo a través de las “reclamaciones”. La más grave de ellas era la relativa a Tehuantepec.

El interés de los Estados Unidos por Tehuantepec, frustrado en las negociaciones de paz gracias en parte a la presencia de intereses británicos, resurgió en 1849. En ese año, los estadounidenses que habían obtenido el privilegio desearon hacerlo efectivo ante un Estado cuya debilidad interna era manifiesta. Los apremios norteamericanos por una vía interoceánica derivaron, en buena parte, del descubrimiento del oro en California, en 1848, y del consecuente interés de los industriales yanquis por abastecer a la creciente población de la costa oeste, región que debía integrarse al resto del país



mediante una comunicación expedita. Los intentos de construir una vía transistmica en Centroamérica fueron obstaculizados por los ingleses. Por esta razón, los Estados Unidos trataron de conseguir a toda costa el reconocimiento mexicano a la concesión de la empresa Hargous, capitalizando la extraordinaria debilidad del gobierno mexicano en los años que siguieron a la guerra. Los norteamericanos jugaron con las divisiones políticas domésticas de México y especularon con la bancarrota crónica de su hacienda para lograr un acuerdo. Este resolvería el problema de la comunicación entre la costa atlántica y pacífica norteamericanas, y ampliaría e integraría el mercado interior estadounidense, además de establecer la infraestructura indispensable para el flujo de manufacturas hacia los mercados asiáticos. La jurisdicción de la península de Baja California no era ajena a estos proyectos: significaba una ampliación considerable de la plataforma costera de los Estados Unidos en el Pacífico y representaba también el “acercamiento” de la costa oriental a su litoral occidental, vía Tehuantepec. Por ello, la obsesión de los Estados Unidos por Tehuantepec se acompañaba de las ambiciones sobre la península.

Las administraciones mexicanas que ocuparon el poder entre 1848 y 1853 fueron presionadas por los regímenes norteamericanos para reconocer la concesión. Su debilidad las llevó a ceder terreno ante las presiones estadounidenses, pero el precario poder del gobierno y las graves pugnas domésticas, expresadas en el seno del congreso y entre éste y el ejecutivo, limitaron la disposición del presidente para conceder el privilegio a los empresarios norteamericanos.

El acuerdo con México sobre Tehuantepec también fue obstaculizado por las contradicciones internas de los Estados Unidos. La brutal rivalidad entre los empresarios del Norte —que deseaban proteger a su compañía de vapores en el río San Juan, en Nicaragua— y los empresarios sureños, propietarios de la concesión en Tehuantepec, impidieron el arreglo.

La debilidad del ejecutivo mexicano frente a la autonomía de algunas regiones, la crisis hacendaria, la fuga de capitales de la ciudad de México, el acoso de los acreedores sobre el gobierno, las incursiones de indios bárbaros en territorio nacional, las expediciones filibusteras en el norte del país, el creciente déficit anual del gobierno, el fracaso de las medidas fiscales que derivó en el aumento del contrabando, la crisis ministerial, no eran más que una muestra del inventario de los males nacionales entre 1848 y 1853. El vacío de poder en esos años, cada vez más patente, dio lugar a un intenso juego de presiones políticas tanto internas como externas. Entre las primeras destacan las coacciones de los grupos conservador y puro sobre el ejecutivo; de las segundas, sobresalen los apremios del gobierno de los Estados Unidos por la construcción de la vía transistmica. Estas presiones y gestiones estadounidenses ante las administraciones de México, hechas paralelamente

a otras similares ante gobiernos centroamericanos, dan una idea de la urgencia norteamericana por contar con la comunicación transistmica.

Como en el caso del expansionismo, la política del gobierno norteamericano con respecto a Tehuantepec estaba vinculada con los intereses de amplios y poderosos sectores de la sociedad estadounidense. La intervención del gobierno de los Estados Unidos, como apoderado de los intereses de una empresa privada, permite apreciar la plena identidad entre uno y otro sector, que recibió el nombre de “interés nacional”. Éste se relacionaba directamente con el deseo norteamericano de integrar el mercado doméstico y con el propósito de insertarse en el mercado asiático. Ambos proyectos formaban parte del extraordinario proceso de expansión del mercado que caracterizó a la economía norteamericana entre 1830 y 1860. Sin embargo, las rivalidades entre los protagonistas del proyecto industrial financiero y los del modelo agroexportador de plantación también se hicieron patentes en el asunto de Tehuantepec. Cuando la administración de Arista se negó a reconocer la concesión a la empresa sureña y los congresistas del Sur exigieron una nueva guerra con México, los legisladores norteros se opusieron a que el gobierno se enfrascara en una contienda en apoyo de una concesión que calificaron de fraudulenta. Desde luego, cabe pensar que los representantes del Norte, opuestos a defender los derechos sureños a la concesión por Tehuantepec, protegían en realidad los intereses de las empresas yanquis en la comunicación transistmica por Nicaragua; de cualquier forma, la pugna interregional impidió el consenso que hubiera desatado las hostilidades deseadas por el Sur contra México. Este enfrentamiento persistió durante algunos años y salió a la luz en la disputa sobre el tratado McLane-Ocampo. Tehuantepec no hizo sino enardecer un conflicto entre los proyectos socioeconómicos del Norte y el Sur que, tiempo más tarde, tendría su desenlace en la Guerra de Secesión. Entretanto, estas contradicciones obraron en favor de la soberanía mexicana en el istmo.

En el ámbito mexicano, el asunto de Tehuantepec sirvió como detonador de las fuerzas que, finalmente, arrojaron del poder al presidente Mariano Arista y prepararon el regreso de Santa Anna. Los congresistas, conservadores y puros, antes enemigos irreductibles, hicieron causa común para oponerse a un tratado que otorgara a los norteamericanos los privilegios en la región ístmica. El caos imperante en el interregno fue la ocasión propicia para que filibusteros franceses y estadounidenses incursionaran de nuevo en Sonora, y para que el grupo de Carbajal, tácitamente apoyado por las autoridades norteamericanas, realizara expediciones en el noreste mexicano. Estas acciones eran prueba fehaciente de las ambiciones insatisfechas del expansionismo norteamericano y daban testimonio de los anhelos separatistas de algunos mexicanos que deseaban la incorporación de las comarcas del norte de México a los Estados Unidos; hacían patentes las graves dificultades de las

administraciones mexicanas de aquel periodo por constituirse en un Estado capaz de salvaguardar la seguridad nacional y de extenderse a todos los rincones del territorio para someter a las fuerzas regionales tendientes a la desintegración.

Al término del año de 1852, coincidieron, con este difícil estado de cosas, la firma de una nueva convención relativa a Tehuantepec con una empresa yanqui, los preparativos para otra expedición de Raousset de Boulbon a Sonora y los problemas por la jurisdicción de La Mesilla. Los afanes expansivos de los Estados Unidos seguían fijos en el norte y en el istmo, pero también existía un marco de prioridades en el cual La Mesilla ocupaba un primer plano. La misión de James Gadsden en México, como ministro extraordinario y plenipotenciario estadounidense, cumplió el objetivo de adquirir dicha comarca.

Gadsden, sureño, exponente del movimiento expansionista *Young America*, especulador de tierras, promotor de empresas ferrocarrileras, expansionista a ultranza, descontento con el tratado de paz de Guadalupe Hidalgo y convencido de la necesidad de establecer una “frontera natural” con México, representaba, además, a un gobierno cuyos propósitos incluían aventuras en el Pacífico y en el Caribe.

El territorio de La Mesilla no era totalmente ajeno a los proyectos estadounidenses en las cuencas caribeña y pacífica. Representaba una franja indispensable para construir un ferrocarril transcontinental que comunicara las dos costas de los Estados Unidos y conectara al Sur con el litoral del Pacífico. Su jurisdicción —al igual que el asunto de Tehuantepec— provocó una grave tensión entre México y los Estados Unidos y los llevó al borde de la ruptura de relaciones. Pero la frágil unión norteamericana habría estado en peligro ante la posibilidad de una nueva guerra con México. Por esta razón, el ejecutivo estadounidense, a diferencia de su ministro en México, optó por una actitud conciliatoria que evitase un enfrentamiento fatal para la unidad. Mantuvo así una postura moderada y su política hacia México se limitó a negociar el territorio indispensable para la construcción de una vía férrea y a exigir la derogación del artículo 11 del tratado de Guadalupe Hidalgo, que obligaba a los Estados Unidos a impedir las incursiones indias en territorio mexicano. De momento hubo que postergar el asunto de Tehuantepec, complicado por la concurrencia de la empresa yanqui.

La legación norteamericana intensificó las presiones sobre México a través de las famosas reclamaciones, antes de entablar la negociación sobre la nueva frontera. Las reclamaciones, como en casos anteriores, obrarían como herramientas precisas y eficaces de la política estadounidense para lograr fines diversos a las propias reclamaciones; serían instrumentos de presión sobre la administración mexicana y servirían como propulsor de la maquinaria expansiva. Es de mencionar que la sagacidad y la retórica del

enviado norteamericano trabajaron en pos del trazo de una nueva “frontera natural”, que difícilmente pudo haberse establecido, pues los confines propuestos por Gadsden no correspondían a ningún accidente de la geografía capaz de detener la voracidad expansiva incontenible de los expansionistas radicales estadounidenses.

Las aspiraciones anexionistas eran compartidas tanto por el Estado como por amplias capas de la sociedad civil estadounidense; en este sentido, el principio democrático fundacional del Estado norteamericano cobró cuerpo en la aventura expansionista. El Estado era depositario y gestor de los intereses profesados por la gran mayoría de la sociedad. Así se afirmó internamente el precepto liberal en que se sustentaba, aunque en sus relaciones con el exterior atropellara los derechos de otras naciones.

La gestión diplomática de Gadsden trató de apoyarse en la grave condición del erario de México y buscó sacar partido de la precaria situación del gobierno. Ni el federalismo ni el centralismo habían sido capaces de consolidar un proyecto nacional que aglutinara a los distintos actores regionales y a los variados sectores sociales mexicanos. Las pugnas irreductibles entre las diversas facciones políticas derivaron hacia la debilidad extrema del gobierno o hacia el afán de centralizar el poder, que condujo a la dictadura. Esta última fórmula demostró, tempranamente, no contar tampoco con el sustento social necesario y puso en evidencia su inclinación en favor de los encantos de la diplomacia norteamericana. Gadsden supo apreciar, entre las penurias económicas del régimen de Santa Anna, el origen de una nueva frontera que, según sus expectativas más moderadas, pasaría los siete estados septentrionales de México a dominio estadounidense, incluida la península de Baja California. La miseria, el pillaje y las necesidades pecuniarias del dictador, que requería con urgencia de recursos para mantener el ejército que lo sostenía en el poder, serían las condiciones propicias para trazar los nuevos linderos entre las dos naciones. A esto debía sumarse la presencia del poderío naval norteamericano en las costas mexicanas y el despliegue del ejército estadounidense en la frontera.

Sin embargo, las pretensiones de Gadsden se toparon con dos obstáculos. Uno lo constituyó la postura moderada del ejecutivo de los Estados Unidos, quien no estuvo dispuesto a poner en peligro la unión de la federación norteamericana en aras de las ambiciones de los expansionistas más radicales. El otro lo provocó la negativa santannista de ceder más allá del territorio estrictamente necesario para la construcción del ferrocarril. Santa Anna, no obstante haber insinuado su disposición de entregar una extensión mayor, se vio precisado a limitar la cesión al territorio de La Mesilla. Las expresiones desaforadas de la voracidad expansionista norteamericana en el noroeste de México, manifiestas en las incursiones de Walker y Raousset de Boulbon en Baja California y Sonora, habían encendido los ánimos de la opinión pública



de México y Santa Anna temió la reacción en su contra, que provocaría la venta del norte del país. No podemos dejar de considerar que en esta ocasión, tal como sucedió en otras anteriores, la administración estadounidense dejaba a la iniciativa de la sociedad civil la tarea de ensanchar la frontera. Posiblemente la expediciones filibusteras de Walker y Boulbon podrían lograr lo que el gobierno de los Estados Unidos habían abandonado: incorporar el noroeste mexicano a su jurisdicción.

Las contradicciones políticas internas, tanto norteamericanas como mexicanas, obraron en favor de la jurisdicción de México sobre las entidades del norte y, en el caso particular que nos ha ocupado, sobre la península de Baja California. Algo semejante había ocurrido al acordarse los tratados de paz de 1848.